

Antología de estudios rurales

**LUCIANO MARTÍNEZ,
COMPILADOR**

© 2000, FLACSO, Sede Ecuador
Páez N19-26 y Patria, Quito – Ecuador
Telf.: (593-2-) 232030
Fax: (593-2) 566139
ILDIS, Fundación Friedrich Ebert
Calama 354 y Juan León Mera
Telefax: (593-2) 231620

Registro derechos de autor: 013818
ISBN Serie: 9978-67-049-1
ISBN Obra: 9978-67-050-5
Compilador: Luciano Martínez Valle
Edición: Alicia Torres
Diseño de portada: Antonio Mena
Diseño y diagramación: RISPGRAF
Quito, Ecuador, 2000

ÍNDICE

ESTUDIO INTRODUCTORIO

La investigación rural a finales de siglo <i>Luciano Martínez Valle</i>	9
--	---

BIBLIOGRAFÍA TEMÁTICA	55
------------------------------	-----------

ARTÍCULOS

La adquisición de tierra por dos generaciones de comuneros en la comunidad minifundista Santa Lucía Arriba, Tungurahua <i>Nancy R. Forster</i>	71
--	----

Mercado de tierras en Ecuador <i>COTECA</i>	95
--	----

La especificidad del empleo rural <i>Luciano Martínez</i>	121
--	-----

Globalización de la economía y campesinado serrano: un análisis en tres dimensiones <i>Roberto Santana</i>	151
--	-----

Los campesinos arroceros y el mercado andino <i>Rafael Guerrero B.</i>	169
--	-----

Ecuador: Pobreza rural <i>Peter Lanjouw</i>	193
---	-----

Políticas agrícolas y desarrollo rural en el Ecuador: con referencia a Morris D. Whitaker <i>Louis Lefebvre</i>	247
---	-----

Aspectos políticos-sociales del manejo de los recursos naturales en la cordillera occidental de las provincias de Cotopaxi y Tungurahua <i>Leonard Field</i>	271
El desarrollo de las agroexportaciones en el Ecuador: la primera respuesta empresarial <i>William F. Waters</i>	291

La investigación rural a finales de siglo

LUCIANO MARTÍNEZ VALLE

Introducción

En el Ecuador, un país con una importante población rural y donde el sector agrario había sido, durante la 'década perdida', el principal motor del crecimiento económico, conjuntamente con el petróleo, era improbable que la investigación sobre el sector rural se hubiera estancado. Si se compara la producción académica desde los años setenta con la de los últimos diez años, se evidencia una real disminución en el volumen no así en la calidad.

Durante los años setenta y ochenta, el país se convirtió en un verdadero laboratorio para la investigación social, especialmente la agraria. Los principales agraristas del continente tenían la posibilidad de estudiar, cotejar hipótesis y plantear nuevas perspectivas sobre un espacio rural pequeño, pero muy rico en diversidad de procesos sociales (reforma agraria, colonización, diferenciación social, etc.). Hay dos tendencias claras durante esos veinte años: los estudios sobre los cambios agrarios y posteriormente, los estudios sobre el campesinado.

La primera línea impulsada por el pionero trabajo del CIDA (1965), retomada posteriormente por las tesis de la maestría de CLACSO, fue sin duda muy sugerente y constituye una base de sólida reflexión para la historiografía agraria futura¹. La segunda, enmarcada en

1 Ver: Varios Autores, *Ecuador: Cambios en el Agro Serrano*, FLACSO-CEPLAES, Quito, 1980. En la línea de los estudios históricos, no se puede dejar de mencionar el importante trabajo de Andrés Guerrero, *La semántica de la dominación*, Ediciones Libri Mundi, Quito, 1991.

la discusión latinoamericana ‘campesinistas vs descampesinistas’, aportó con una renovada visión la complejidad de la economía campesina, más centrada en la dimensión socioeconómica, pero sin abordar los aspectos culturales y organizativos. La dinámica de toda esta rica experiencia tenía indudablemente su base en la afloración de toda una generación de sociólogos volcados a la investigación que marcaron hasta los años ochenta el ‘qué hacer’ sobre el problema agrario; en cambio, fueron menos frecuentes los estudios económicos y antropológicos².

La pauta sociológica marcó en cierto sentido ‘el paso’ de la investigación de las otras disciplinas. No hubo en esta fase ni ‘alteridad’ ni ‘multidimensionalidad’ en la investigación sobre lo rural. En cambio, sí hubo una abundante producción, tanto que algunos analistas mantienen una visión altamente optimista de este período: riqueza en cuanto a los nuevos problemas abordados, importantes avances metodológicos y hasta impacto en la sociedad civil (Chiriboga 1988).

En una coyuntura en que empezaba a desmoronarse el modelo de sustitución de importaciones, repensar la realidad agraria del país y su importancia, es como llegar un poco tarde al convite. Desde la mitad de los años ochenta, se asiste a una ofensiva de las políticas neoliberales hacia el mismo sector agrario que culminó con la expedición de la Ley de Desarrollo Agrario (LDA) en 1994. En este período, sobre todo en los años noventa, se evidencia una relativa situación de crisis de la investigación y pensamiento agrarios. Se pueden señalar algunas de las posibles causas:

- ▲ disminución y en algunos casos pérdida de la importancia del rol de la investigación en las ONG y organismos estatales vinculados al desarrollo rural,
- ▲ agotamiento prematuro de algunas temáticas de investigación,
- ▲ falta de incentivos a la investigación agraria y pérdida de espacio en universidades, centros e institutos de investigación,
- ▲ imposición de modas temáticas relacionadas con las posibilidades reales de obtener financiamiento, inexistencia de vínculos reales entre la investigación y las necesidades de la sociedad civil.

2 Dentro de los pocos estudios de orientación económica de esa época, vale mencionar a Carlos Larrea et alii, 1987. El estudio de Blanca Muratorio, (1982), marca una veta de investigación antropológica, lamentablemente no continuada en el país.

Solo a partir del levantamiento indígena de 1990 y luego de su réplica en 1994 se empieza a reflexionar nuevamente sobre el sector rural, aunque ahora bajo el paradigma del indigenismo de viejo y nuevo cuño.

En una coyuntura tan delicada, con una ofensiva del pensamiento neoliberal más ortodoxo y una constatada crisis y debilidad del movimiento campesino, las ONG e instituciones de desarrollo no realizaron esfuerzos para frenar a tiempo o al menos discutir ampliamente el diseño de las políticas para el sector agrario. No existía en la sociedad civil ningún otro sector capaz de presentar alternativas al modelo neoliberal. La prueba está en que una ONG como IDEA, con una clara orientación afín a las políticas neoliberales, logra sentar las bases científicas de la posterior LDA. Las universidades tampoco lograron articular una mínima reflexión sobre la suerte de los sectores más desfavorecidos del medio rural, peor presentar críticas al modelo en curso, lo que demuestra la postración de la investigación universitaria sumida en una profunda crisis³.

Quizá lo que más afectó a la investigación fue su desconexión con las fuentes de financiamiento. La investigación social, en general, empezó a ser considerada como inútil o poco relevante para aquellas instituciones que si tenían fuentes económicas y posibilidades de hacerlo como las organizaciones de financiamiento para el desarrollo ubicadas en los países centrales y las ONG. Era más importante la 'acción' en cualquier línea antes que disponer de una reflexión sólida sobre las tendencias económicas y sociales predominantes en el medio rural. Bastaba con aplicar los métodos del 'diagnóstico participativo', para disponer de los elementos científicos para la acción. De esta forma, se evacuaron las posibilidades de investigar en importantes áreas campesinas donde se implementaban proyectos desarrollistas.

La otra dimensión importante es la imposición de 'modas' de investigación por aquellas instituciones que sí necesitaron de ella durante estos años (género, agroecología, sostenibilidad, y actualmente el tema del capital social). Así, la investigación se subordinó a demandas

3 Así por ejemplo, la *Revista de Ciencias Sociales* editada por la Escuela de Sociología de la Universidad Central, que hasta mitad de los años 80 publicó interesantes números sobre el problema agrario, desapareció de la escena casi sin dejar rastro.

puntuales de financiamiento. Esto no es nada nuevo y sucede en todas partes del mundo. Lo grave es que en un país como el Ecuador, con pocos recursos humanos, esta tendencia absorbió tal vez los mejores cuadros, mientras otros sectores importantes de la sociedad civil con prioridades políticas quedaron huérfanos de estos apoyos.

Un último elemento es el marco de la globalización o mundialización de la economía y la cultura que empieza a perfilarse claramente a principios de los años 90. En esta línea, hay que decirlo claramente, todavía no existen estudios que muestren su impacto sobre la estructura productiva, las respuestas de los diversos actores económicos y la viabilidad de los grupos campesinos. Hacia finales de siglo, donde caen las barreras y los últimos obstáculos para el funcionamiento del capitalismo global, la investigación de nuevos problemas tanto desde la dimensión estrictamente técnica como de la socioeconómica, brillan por su ausencia, lo que constituye un serio *handicap* para el diseño de políticas para el sector rural. Se podría decir que esta no es una tarea fácil y que se necesita de enfoques pluridisciplinarios y de metodologías de trabajo renovadas, un verdadero reto para la investigación futura, si finalmente lo que se busca es vincular el conocimiento con la práctica, en otras palabras, crear el puente entre la investigación y las políticas para el sector rural.

Pero no toda la investigación -hay que remarcarlo- estuvo desvinculada de los procesos de cambio más importantes del sector rural. De hecho, existen trabajos pioneros en este sentido en el contexto latinoamericano. Así por ejemplo, los estudios sobre la relación campo-ciudad, empleo no-agrícola, tipología de los campesinos y políticas focalizadas para el desarrollo rural son temas prioritarios dentro de la actual agenda para la elaboración de 'políticas diferenciadas' para el sector rural⁴. Lamentablemente estos estudios tuvieron poca difusión o no fueron aprovechados por las instancias que toman las decisiones de las políticas agrarias. Esta desvinculación afectó al país al no procesar todos los avances teóricos disponibles, al contrario de lo que sucede en otros países (caso de México y España) en donde, dentro de las instan-

4 Este fue el tema del "Seminario Latinoamericano de Heterogeneidad Agraria y Políticas Diferenciadas", realizado en México entre el 27 y 29 de noviembre de 1997, con el auspicio de FAO, SAGAR y RIMISP.

cias institucionales de gobierno, subsiste un importante espacio para la reflexión de los problemas del sector.

La brecha entre investigación y diseño de políticas es importante cerrarla a través de un doble esfuerzo: del lado de la investigación, priorizando los temas que permitan a los *policy makers* disponer de mayores elementos de juicio para el diseño de políticas de mediano y largo plazo; por parte de las instituciones del sector, abriendo las puertas a la discusión, al debate y a la difusión sobre los temas prioritarios. Como vínculo agenciador podrían actuar las ONG que trabajan en el sector rural, más proclives a la discusión y a la necesaria concertación para aprovechar los pocos esfuerzos que todavía se realizan en el campo de la investigación.

Los aportes al conocimiento del sector rural

El sector rural ecuatoriano tiene una característica básica: su alta heterogeneidad, tanto en lo que se refiere al paisaje agrario, a la configuración de la estructura productiva, así como en la conformación de los sujetos sociales, formas de organización social y prácticas culturales. Se trata de un país pequeño en superficie pero altamente diferenciado en regiones y dentro de ellas. De allí la enorme dificultad de la generalización, y el acecho -siempre presente- de la simplificación de la realidad basándose en unos pocos datos estadísticos. La situación es más grave si se comprueba que la investigación sobre las principales regiones del país (sierra, costa y oriente) son muy desiguales en cantidad y calidad: existe abundante información sobre la sierra, pero no hay un equivalente sobre las otras dos regiones. Así pues, muchos de los temas analizados en este trabajo tienen esta desventaja que solo podrá ser llenada cuando se equilibre el conocimiento sobre el sector rural de las regiones mencionadas.

En este estudio, la multiplicidad de temas se agrupó bajo siete ejes que considero centrales para la explicación de los problemas rurales hacia fines de siglo; además, estarán presentes al menos en los 20 años por venir. Estos son: las transformaciones rurales, las políticas agrícolas, el capital financiero, el mercado, la sostenibilidad, la tecnología y el capital social.

Una antología sobre los estudios del medio rural en su concepción más amplia, habría significado abordar muchas otras temáticas como migración, historia agraria, género, medio ambiente. Estas serán abordadas en otros volúmenes, lo que me ha permitido poder profundizar el abanico de temas seleccionados para esta antología.

Las principales transformaciones rurales

Se acepta que la sociedad rural de hoy no es la misma que hace veinte años. El predominio de 'lo agrario' no es tan evidente, en cambio, la transformación de la estructura agraria y la cuasi desaparición del sistema de hacienda sí es clara, lo que no significa, en ningún caso, una mejor distribución de la propiedad.

El fenómeno más interesante es que mientras el perfil ocupacional de hombre rural ha cambiado mucho, también el mercado, en la acepción más profunda del término, ha invadido los más recónditos intersticios del hábitat rural. Cuando uno visita las comunidades más indias del centro del país, no puede dejar de constatar que algo profundo ha ocurrido en el paisaje y más aún en la vivienda, en los hábitos alimenticios, en el vestido, en la demografía. La sociedad rural se ha modificado profundamente en estas dos últimas décadas (Martínez 1994) y ahora experimenta las consecuencias negativas del avance de aquellos procesos que incuba el capitalismo y erosiona las sociedades campesinas: pobreza, migración, inviabilidad económica.

Hacia finales del siglo XX, el país no escapa a los efectos de la globalización, pero experimentando la resistencia organizada de aquellos sectores sociales más golpeados por el proceso modernizante, como el indígena. La sociedad rural también es diferente en su conformación social y surge un reacomodo de poderes que todavía no cuaja en una nueva estructura. Nuevas demandas, nuevos actores se enfrentan a desafíos inéditos. El Estado, contra el que se luchaba en los años sesenta y setenta, ya no es más el protagonista económico aunque sí político.

Las condiciones en las que funciona actualmente la economía inducen a replanteamientos en la sociedad rural que atraviesan los códigos y el lenguaje de los expertos del mercado. Se asiste a un reacondi-

cionamiento de las clases sociales y al surgimiento de nuevas formas de organización y de lucha en arenas poco conocidas, lo que crea una imagen aparente de confusión y de angustia. En este 'nuevo espacio social' hay tendencias que subyacen, otras que lentamente se transforman para dar paso a una sociedad rural diferente.

Por otro lado, se han creado condiciones potencialmente explosivas desde el punto de vista social como la pobreza y la falta de recursos para más de un tercio de la población rural. Más grave aún, sin políticas, ni públicas ni privadas, que permitan avizorar su solución en el mediano o largo plazo. El cambio ha traído como secuela la inequidad y la creación de condiciones injustas para los pobres rurales. Así pues, las propuestas alternativas deberían considerar estas dimensiones -escandalosas y explosivas al mismo tiempo- para enfrentar con mucho realismo las soluciones más adecuadas en una coyuntura de fines de siglo que Wallerstein la caracteriza como "un tiempo de desórdenes masivos, tanto locales como regionales y mundiales" (Wallerstein 1997).

La tierra y el mercado de tierras

La tierra es el tema más importante y conflictivo del siglo. Las investigaciones y trabajos desarrollados durante la última década, tuvieron su corolario político en la expedición de la Ley de Desarrollo Agropecuario (LDA) en 1994. Ya desde finales de la década del 80, a pesar de no disponer de datos provenientes de un censo agropecuario actualizado, se empezó a comentar sobre los cambios en la estructura de tenencia de la tierra. Así, por ejemplo, Manuel Chiriboga, aprovechando los datos del ex-IERAC, mostró la disminución del número de las grandes explotaciones (mayores de 100 hectáreas) y el crecimiento de las propiedades medianas, tanto en número como en la superficie controlada, mientras los minifundios continuaban su marcha hacia una mayor fragmentación. De esta forma, la estructura bipolar del agro ecuatoriano aparecía matizada por la presencia de un importante sector de propiedades medianas que se formaron por varias vías: subdivisión de las grandes haciendas, consolidación de procesos de colonización, penetración del capital extra-agrario en el campo, entre otras causas. Los cam-

bios más notables se dieron sobre todo en la sierra centro-sur, en la costa centro-norte y en la Amazonia (Chiriboga 1989).

Los cambios en la estructura de la propiedad sobre todo en la sierra central ya habían sido analizados a principios de la década del 90, desde la perspectiva de la disolución de las haciendas tradicionales por la presión de los campesinos en el caso de Chimborazo (Thurner 1990) y el funcionamiento de un dinámico mercado de tierras entre campesinos minifundistas en el caso de Tungurahua (Foster 1990). El estudio de Thurner muestra cómo ya no eran viables las grandes haciendas en áreas de denso poblamiento indígena y cómo finalmente triunfó el 'asedio interno y externo' sobre las reservas hacendales, aunque con resultados diferentes de acuerdo a las estrategias desplegadas, a la ubicación ecológica y al acceso al mercado.

En Chimborazo, a inicios de los años 80, existía un mercado de tierras que no funcionaba de acuerdo a las reglas del mercado, sino como el producto de subdivisiones hacendales y por la 'presión' de los campesinos. En algunos casos, esta presión se ejercía por tierras de buena calidad y con riego, lo que permitió en contados casos consolidar una economía mercantil comunera exitosa (caso de Gatazo Zambrano).

El estudio de Foster, ubicado en Tisaleo, provincia de Tungurahua, en cambio, muestra el funcionamiento de un mercado de tierras más dinámico en el que los campesinos con recursos tienen acceso a la venta parcial o total de propiedades de ausentistas pueblerinos, lo que les permite una importante movilidad hacia arriba. Lo interesante de este mercado es que, analizado a través de varias generaciones, el acceso a nueva tierra no conforma una base para la formación de estratos de 'burguesía rural', aunque se conserva la diferenciación campesina.

No obstante, en ambos casos, solo se logran cristalizar unidades de producción minifundistas, con movilidad social importante, en el caso de Tungurahua, sin ella en el caso de Chimborazo. El minifundio avanzó, entonces, en la sierra central en gran parte, como efecto del funcionamiento del mercado de trabajo todavía encapsulado en las relaciones patrón-cliente en Chimborazo, más cercano a las leyes de la oferta y demanda en Tungurahua. Un dato interesante que permite reflexionar sobre el funcionamiento de mercados de tierras sin mayores cambios en la legislación agraria del país.

Hacia inicios de la década del 90 y frente a la necesidad de implementar las políticas de ajuste en todos los sectores de la economía, se empezó a estudiar el sector rural con una visión más empresarial, esto es, vinculada con las políticas de desregulación. El estudio más polémico, realizado en 1993 es el de Camacho, auspiciado por IDEA (Camacho 1993). Un trabajo tendencioso y con fragilidades metodológicas sorprendentes como aquella de generalizar una tesis a partir de cuatro estudios de caso. La tesis central, que alcanzó notoria publicidad gracias al apoyo de las cámaras de agricultura, es que los comuneros de la sierra tienen mucha tierra de páramo que no la utilizan eficientemente, por lo mismo, ya no necesitan acceso a más recursos sino más bien abrirlos a un mercado de tierras que permita dividirlos en forma individual. Más allá de la validez o no de los resultados alcanzados con esta investigación, lo cierto es que sirvió de base 'científica' para justificar varios de los postulados centrales de la LDA, por ejemplo, la posibilidad de subdivisión de la tierra comunal, la eliminación de la reforma agraria, la apoteosis exagerada del mercado de tierras como el mecanismo más justo para el acceso a la tierra.

Visto desde otro ángulo, se demostró que se necesitan trabajos de investigación que sustenten las políticas agrarias, aunque en este caso, las de corte neoliberal. Sorprendentemente, el análisis sobre la tenencia de la tierra, tema que entre los 'cientistas sociales' y ONG se consideraba ya obsoleto, fue recuperado por el 'lobby' empresarial que buscaba cambiar radicalmente la legislación agraria. Las lecciones del relativo éxito de este trabajo se encuentran en los vínculos entre investigación, difusión y políticas agrarias a través de las esferas de poder existentes en la sociedad. El otro aspecto que llamó la atención es que tampoco hubo una respuesta 'contundente' a esta visión del agro, lo que mostró la debilidad de la investigación sobre este tema tan crucial entre ONG, investigadores, organizaciones indígenas y campesinas.

El tema de los mercados de tierra fue recuperado inicialmente por el FEPP y más tarde por la FAO, a través de sendos estudios sobre la sierra, costa y amazonia (Ibarra y Carrasco 1991; Speiser 1993; Ibarra y Ospina 1994; Rodríguez 1994; Tamariz y Villaverde 1997). Los primeros constituyen interesantes monografías de algunas de las provincias en donde desarrolla actividades esta institución vinculada a la Iglesia Católica y muestran los principales cambios en la conformación

de una nueva estructura agraria, la estructura productiva, los conflictos por la tierra y solo marginalmente la situación de los mercados de tierra.

El estudio más importante es el realizado por Hernán Ibarra y Pablo Ospina sobre la provincia de Cotopaxi, en donde se evidencia claramente las tendencias señaladas anteriormente por Chiriboga: minifundización de estructura agraria provincial, pero acompañada del incremento de las propiedades medias, aumento de la ganadería entre los pequeños y medianos propietarios, agudización de conflictos intra-comunitarios en torno al páramo y una crisis del funcionamiento interno de las comunidades. Los precios de la tierra son más altos en las zonas densamente pobladas y tienden a disminuir en las áreas subtropicales, mientras las tierras del páramo son evaluadas de acuerdo a la calidad de los suelos y a su vocación agrícola o pecuaria.

Los estudios realizados por la FAO muestran también varias tendencias importantes:

- a) En la costa, el mercado de tierras más dinámico se ubica en las áreas de predominio de la agricultura y ganadería comercial: banano, ganado, camarón, maíz duro. En importantes zonas estudiadas de las provincias de El Oro y Los Ríos se estarían generando procesos de concentración de la tierra, acompañados en algunos casos de un incremento del minifundio (maíz duro) y en otros, de la medianización de la propiedad (banano). En las áreas arroceras, en cambio, gracias a la política de apoyo estatal, las unidades productivas en manos de campesinos se conservan y no se ha desarrollado un mercado importante de tierras ni una mayor diferenciación campesina.
- b) En la sierra, se ha generalizado un mercado intra-campesino de transacciones de unidades minifundistas, tanto por la vía legal y especialmente por la informal; un mercado que es denominado como simétrico pero que exige una expulsión permanente de campesinos.
- c) Se evidencia que el mercado formal funciona en áreas de cultivos comerciales y beneficia a los grandes empresarios, mientras que el mercado informal es importante en áreas campesinas más deprimidas. De esta última experiencia se formula la pregunta de si a tra-

vés de este tipo de mercado no se perfila también una estrategia de resistencia campesina a las presiones del mercado.

Posteriores estudios, todavía no publicados, demuestran que el mercado de tierras disponibles para grupos campesinos es muy limitado y de baja calidad, esto es, que únicamente las tierras marginales de escaso valor para hacendados y empresarios estarían disponibles, de esta forma quienes más se benefician son los empresarios que pueden deshacerse de tierras de escaso valor a precios muy altos, dada la presión de los campesinos (FUNDAGRO 1996). De todas formas, continúa la subdivisión y venta de tierras comunales de páramo, al tenor de la aplicación de la LDA. Este nuevo mercado de tierras, también consolida la propiedad minifundista, aunque no siempre en beneficio de los propios comuneros.

Antes de terminar este acápite, es importante reseñar el trabajo de Pablo Ospina, sobre la aparcería en la provincia de Cotopaxi (Ospina 1993). En efecto, la aparcería ha comenzado a ser vista favorablemente como una modalidad para dinamizar los mercados de tierra, sin necesidad de traspaso de la propiedad. En este sentido, cada cierto tiempo las cámaras de agricultura (sobre todo de la sierra) promueven la legalización de esta forma de tenencia, argumentando que con ello crearían empleo en el campo y pondrían en producción toda la tierra actualmente disponible. El trabajo de Ospina, demuestra que la aparcería no solo es una forma de producción sino también de empleo y que se practica principalmente entre pequeños campesinos afectados por la falta de este recurso. La aparcería es un fenómeno vinculado a la escasez de tierra para los campesinos pobres y escasez de mano de obra para aquellos que disponen de más recursos (campesinos medios y empresarios). En la práctica existen varios tipos de aparcería, algunos más parecidos a las formas de reciprocidad andina, otros más cercanos al arrendamiento en especie de corte capitalista, con modalidades intermedias en las cuales intervienen diversos actores sociales, desde el campesino pobre, hasta el capitalista, pasando por intermediarios, prestamistas o 'chulqueros' y transportistas. Es una forma muy compleja que subsiste ya que en el medio rural, sobre todo serrano, los salarios son tan deprimidos que es mejor cualquier trabajo en la ciudad.

La estructura agraria

Este tema, uno de los ejes del pensamiento agrarista hasta fines de los años 80, no ha sido retomado sino en muy pocos estudios. Uno de ellos, es el de Charles Surenaim (1994), realizado en la zona de plantaciones empresariales de Sto. Domingo de los Colorados. El estudio muestra la heterogenidad de empresas agrícolas y las diversas estrategias utilizadas por los empresarios con respecto a la mano de obra: desde empresas modernas y con avanzada tecnología que utilizan mano de obra temporal, hasta empresas más atrasadas que inclusive han formado en su interior 'reservorios de mano de obra' como una forma de abastecerse de trabajadores. Como telón de fondo se dibuja el permanente temor de los empresarios hacia los trabajadores siempre dispuestos a las invasiones. De allí que en la mayoría de las empresas se contrata trabajadores temporales a través de intermediarios 'contratistas' convertidos en personajes centrales de la relación entre capital y trabajo. En algunos casos, cuando las empresas se encuentran cerca de los pueblos (verdaderos bolsones de mano de obra barata), el temor a las invasiones incluso ha llevado a la utilización de guardias de seguridad y a aumentar la supervisión del trabajo de los temporales.

Los procesos de colonización han sido objeto de muy pocos estudios, a diferencia de lo que sucedió en la década del 70. Surenaim (1994) estudia la zona de vieja colonización de Santo Domingo de los Colorados. Desde una perspectiva etnográfica analiza la continuidad y discontinuidad en las cooperativas agrícolas surgidas de la primera ola colonizadora de esta región. El estudio de caso de una cooperativa en la parroquia de Alluriquín, muestra la articulación de grupos de parentesco sobre formas novedosas de gestión de los recursos, en especial la tierra. Según este autor, se habrían recreado algunas de las formas de reciprocidad andina que a su vez, han incubado procesos nuevos, tanto en la identidad de sus miembros como en el manejo de recursos. Así, por ejemplo, los colonos ya no hablaban quichua, pero mantenían un sistema de cargos de corte serrano aunque con adaptaciones a la zona. Igualmente, se ha modificado el patrón de herencia 'multilateral' por uno diferente, en el cual conserva la propiedad el hijo que decide quedarse en la zona y casarse con una persona de la cooperativa, de esta manera logran mantener un tamaño similar al original.

En definitiva, se ha 'reinventado' una nueva comunidad bajo la denominación formal de 'cooperativa', como una forma de frenar los conflictos latentes al interior de los grupos parentales y evitar así las situaciones de pobreza y desintegración social, causa originaria de su migración hacia las tierras bajas.

El empleo rural

Sin duda, la modificación en el perfil de la ocupación y en general de la estructura del empleo es uno de los cambios más espectaculares registrados en el medio rural ecuatoriano. Hasta hace unos pocos años, era normal considerar a la población rural como ocupada únicamente en la actividad agropecuaria. Con este criterio se diseñaban las políticas hacia el sector y con mayor razón las políticas de desarrollo rural para los campesinos.

A raíz de la elaboración de la Encuesta de Hogares Rurales, realizada por el INEM en 1990, se dispuso, por primera vez, de datos consistentes relativos al empleo en los hogares y no solo en la UPA como se había utilizado hasta ese momento. De esta forma, se pudo analizar datos sobre las estrategias ocupacionales de los miembros de las familias rurales, de las diversas fuentes de ingreso y de la estacionalidad del empleo. El estudio pionero de Martínez sobre el *Empleo rural en el Ecuador* (1992), descubre que cerca del 40% de la población rural del país, está dedicada a actividades no-agropecuarias, donde sobresalen la artesanía, comercio y servicios.

Las diferencias regionales también son importantes: en la costa predomina el trabajo agrícola en manos de los hombres, mientras en la sierra la agricultura prácticamente se ha feminizado. Las categorías ocupacionales más importantes son las de cuenta propia y trabajador familiar, mientras el trabajo asalariado temporal solo es mayoritario en la agricultura. En el contexto del predominio de la economía campesina, toma un rol de primera magnitud el trabajo femenino, mucho más importante y diversificado en la sierra, con menor peso e importancia en la costa. Otro rasgo importante es la segmentación regional del mercado de trabajo rural, lo que obedece a fuertes cambios poblacionales y al desarrollo de las ciudades intermedias sobre todo en el ca-

so de la costa. El estudio advierte que la economía campesina es la que genera más empleo pero en la medida en que un 30% de la PEA rural trabaja como 'familiar no remunerado' encubre el subempleo, situación que no puede mantenerse a largo plazo antes que la sociedad rural experimente graves problemas sociales. Este trabajo cuestiona la visión agrarista tradicional de los productores rurales e induce a plantear nuevas perspectivas de análisis, considerando que los campesinos ya no son tan campesinos (si es que alguna vez lo fueron) y que es necesario considerar la situación de heterogeneidad social rural y la multiocupación.

En otro estudio, Martínez (1993) profundiza el estudio de los trabajadores asalariados temporales para demostrar que en realidad se trata de un grupo 'estable' en su categoría ocupacional aunque muy inestable en sus relaciones de trabajo. Mayoritariamente este grupo no se vincula con empresas de tipo capitalista, sino sobre todo con unidades campesinas muy heterogéneas. Llama la atención el mercado de trabajo existente en unidades campesinas con recursos, sobre todo las formas de contratación de mano de obra y el variado sistema de intermediarios según las regiones. Se trata, en definitiva, de un mercado de 'segunda categoría', en donde participan los trabajadores menos calificados, con remuneraciones bajas y con una oferta casi siempre precaria. Todo esto es posible dada la situación generalizada de pobreza rural que permite la proletarización 'informalizada' de una fuerza de trabajo que se refugia en la economía campesina.

Este mismo autor incursiona en el análisis del empleo femenino en el área rural (Martínez 1992), poniendo en evidencia las importantes diferencias regionales: las mujeres de la sierra están más integradas en el proceso productivo que las mujeres de la costa. Existe una marcada diversificación ocupacional, y las mujeres conforman una mano de obra de 'segunda categoría'. En efecto, las mujeres casi siempre son 'trabajadores familiares no remunerados', es decir que participan activa y en algunos casos mayoritariamente en el trabajo de la familia, pero no reciben remuneración. Muestra también que en algunas ramas de actividad como la artesanía, servicios y comercio, las mujeres dentro de la categoría ocupacional 'cuenta propia' tienen porcentajes importantes, situación que no ocurre con la agricultura. El 'empoderamiento', entonces, se realiza en actividades más diversificadas y no

tanto en la agricultura, a pesar de que al menos en la sierra, el porcentaje de mujeres al frente de la finca es importante en áreas de población indígena migrante. Por último, la educación de las mujeres permite una inserción más productiva en el mercado de trabajo, en especial en el caso de las jóvenes.

La relación campo-ciudad

Debido a las transformaciones ocurridas en la actual sociedad rural este tema debería concentrar los esfuerzos y recursos disponibles de la investigación, pero la realidad es que se dispone de escasos trabajos.

Un primer acercamiento a esta problemática se puede encontrar en la tesis no publicada de Carlos Larrea, en donde se elabora una interesante tipología de ciudades del Ecuador (Larrea 1992). Dentro de su clasificación, se encuentran por lo menos 4 tipos de ciudades que tienen estrecha relación con el medio rural: los centros manufactureros y artesanales, los centros informales, las ciudades agrícolas, las ciudades agrícolas-mercado. A pesar de que en todas ellas predomina la PEA en el sector servicios, sin embargo, tienen un importante porcentaje de población ocupada en la agricultura. El hecho de que durante el 'boom' petrolero, no se haya producido una concentración poblacional en las dos principales ciudades del país se debe a incentivos a la descentralización, pero también al importante crecimiento de la manufactura en pequeña escala y de pequeñas empresas del sector terciario en los centros urbanos intermedios e incluso pequeños.

Un acercamiento más detenido de la relación campo-ciudad se ha hecho a través del estudio de la 'dinámica mercantil' y su difusión en el medio rural, sobre todo entre los pueblos ubicados cerca de ciudades-mercado. El estudio de Martínez muestra la estrecha relación existente entre el desarrollo de las actividades artesanales en los pueblos rurales que rodean a la ciudad de Ambato y el capital mercantil ubicado en esta última (Martínez 1994). Factores tales como la presencia de una estructura agraria minifundista y la muy débil presencia del sistema de hacienda, el desarrollo de buenas vías de comunicación, la presencia de una red de ferias urbano-rural, permitieron el temprano desarrollo de estrategias artesanales en el medio rural y la

posibilidad de convertir a los minifundios en económicamente viables. Todo ello no habría sido posible si no se toma en cuenta la acción de los comerciantes y del capital mercantil sobre el 'hinterland' rural, aprovechando la abundante mano de obra barata, los conocimientos de los artesanos y el dinámico mercado urbano. El papel de los comerciantes, que pueden ser al mismo tiempo productores, en este caso no es tan desestructurador como en las actividades agrarias y gracias a su dinámica, los productos artesanales fluyen en el mercado interno y hasta externo.

El mismo fenómeno se observa en la provincia del Azuay, con focos artesanales importantes como Gualaceo, Paute, Chordeleg y varias parroquias cercanas a la ciudad de Cuenca. En esta provincia, más que en ninguna otra, el campesinado busca alternativas como la minería y la artesanía o desarrolla también iniciativas en la comercialización de productos agrícolas, que han sido estudiadas como 'casos de reorientación campesina en la crisis' (Einzmenn, 1991; Vázquez et alii, 1991). Actualmente, hay toda una dinámica artesanal relacionada con el trabajo organizado y no organizado de las mujeres (bordadoras, tejedoras, etc.) que surge como respuesta de los campesinos a las limitaciones de sus recursos y al trabajo tradicional agrícola (OFIS y Sendas 1993).

El flujo de divisas proveniente de los migrantes campesinos a Estados Unidos ha transformado el medio rural de varias zonas en Cañar y Azuay. Una inyección de divisas provenientes de fuera ha generado una nueva dinámica económica, no siempre orientada a la esfera productiva, pero sí a la suntuaria de la construcción. No se puede negar que un importante porcentaje de los activos financieros de la ciudad de Cuenca proviene de estas remesas originadas por el trabajo de los campesinos migrantes al exterior⁵. Este fenómeno también ha sido visto como resultado de una intensa vinculación de la economía campesina con el capital internacional, una de cuyas manifestaciones más interesantes es justamente la migración al exterior, el trabajo artesanal y las actividades extractivas (Vásquez 1991).

5 Según una estimación realizada recientemente, unos 50.000 azuayos residen en Nueva York y los migrantes envían a la provincia un monto anual de 200 millones de dólares. Cf: Mariana Moor, 1996.

En varias ciudades 'intermedias' del país se pueden constatar iguales fenómenos, que gracias al desarrollo de importantes actividades económicas han empezado a transformarse. Este es el caso, por ejemplo de Cayambe, en Pichincha, que se ha convertido en un importante centro de transacciones financieras y económicas con el consecuente florecimiento de actividades turísticas, restaurantes, etc., gracias al impacto de las empresas lecheras y más recientemente de las plantaciones de flores. Se constata, así, una importante línea de investigación hacia el futuro, sobre todo si se tiene en cuenta los probables cambios políticos (como la descentralización) que podrían beneficiar la consolidación de procesos parecidos. El espacio urbano, sobre todo de las pequeñas y medianas ciudades se ha modificado radicalmente en los últimos veinte años y es necesaria una nueva lectura tanto desde el punto de vista económico, como desde el político, cultural y hasta étnico (de la Torre 1996).

Campesinado y comunidades indígenas

En la década del 80, el campesinado de la sierra fue uno de los sectores sociales privilegiados para el análisis. La variedad de estudios de caso realizados principalmente en la provincia de Chimborazo (la de mayor densidad indígena del país) y en menor medida en las provincias de Imbabura, Cotopaxi y Azuay, confirman este hecho. Sin duda, la influencia de los estudios de Chayanov, Sahlins y Wolf se pueden detectar en los enfoques socio-demográficos y antropológicos que predominan en estos trabajos. A pesar de que ya se disponían de los trabajos de E. Feder, de Carmen Diana Deere y de Alain de Janvry, escaseaban los enfoques desde el punto de vista económico (a excepción de los trabajos realizados sobre el Azuay). A principios de la década del 90, estos estudios disminuyeron en número y se empezó a privilegiar los referentes a las comunidades indígenas, vistas no tanto desde el análisis económico sino preferentemente desde el antropológico-etnicista⁶.

6 Esta dimensión de los estudios sobre comunidades indígenas es analizada en otro volumen de esta misma colección, coordinado por Andrés Guerrero.

Sin embargo, sobre el campesinado considerado como una categoría social más amplia, esto es, que incluye a los productores sin considerar el corte étnico, se dispone de algunos trabajos novedosos.

Un trabajo interesante sobre los nuevos desafíos del campesinado serrano frente a los desafíos de la globalización fue desarrollado por Roberto Santana (1993). Frente al aperturismo y la entrada del país en la OMC, hay el riesgo de que grandes sectores del campesinado serrano se queden fuera de las posibilidades de competir en el mercado, precisamente por su calidad de 'minifundistas'. Santana advierte sobre la necesidad de cambiar el paradigma del análisis del campesinado y las comunidades indígenas por sobre la visión del desarrollo rural y las estrategias 'étnico-campesinas' privilegiadas tanto por ONG como por las mismas organizaciones indígenas como la CONAIE.

El asunto es cómo enfrentar al mercado, para lo cual se necesita pensar más allá del proceso de la comercialización y por lo mismo se requiere un cambio de actitud entre los productores, sean indígenas o no, para ver todo el proceso desde el 'qué produzco al cómo y a quién vendo'. Esto pasa por un cambio de 'mentalidades' en los niveles organizativos de las comunas, las OSG en donde se debería privilegiar la dimensión de 'gestión empresarial'. En este sentido existiría más bien una debilidad en las organizaciones campesinas e indígenas antes que una fortaleza, lo que demanda la formación de cuadros que privilegien las estrategias empresariales en las comunidades. Una propuesta interesante, a pesar que no analiza los límites impuestos por el grado de monopolización del mercado, la lucha social en la arena del mercado y las restricciones impuestas por la etnicidad.

Otro estudio más reciente es el realizado por Martínez sobre las comunidades indígenas de la zona de Cotacachi (1996). En este caso se trata de un estudio comparativo temporal de dos comunidades para mirar sus cambios en el ámbito socioeconómico y también demográfico. El autor comprueba que estas comunidades continúan su proceso de minifundización, se han acentuado las tendencias migratorias y han desaparecido las escasas posibilidades internas de generación de empleo a través de la artesanía. En estas condiciones, no hay mucha base para la vigencia de las relaciones de reciprocidad y solidaridad andinas, es decir que el capital social es muy débil, salvo la vigencia de la minga comunitaria para obras de beneficio social. Lo interesante es

que se evidencian importantes modificaciones en el patrón reproductivo comunal: predominio de familias con pocos hijos, tendencia a la baja de la tasa de fertilidad, nueva valoración de los hijos y surgimiento de la preocupación entre las mujeres con respecto a los temas reproductivos.

La preocupación por el tema demográfico también está presente en otro trabajo del mismo autor, publicado en 1995, sobre la base de una investigación realizada en 1986-87 (Martínez 1995). Se trata de un análisis de las ex-cooperativas de la zona de Cayambe, en donde se analiza el proceso interesante de bloqueo del acceso a la tierra para las nuevas generaciones de arimados, lo que generó el surgimiento de conflictos sociales y de un nuevo patrón de comportamiento demográfico: reducción del tamaño de la familia, valoración de la educación como dote para los hijos, disminución de la fecundidad. En ambos estudios el autor acentúa el hecho de que la vinculación mercantil de estas comunidades produce importantes cambios en la demografía indígena.

Sobre el campesinado indígena de la zona de Otavalo, Tanya Korovkin estudió el significado de la producción diversificada de las comunidades en el contexto del mercado capitalista (Korovkin 1997). Si bien el avance del capitalismo genera transformaciones importantes en las comunidades (que se evidencian en la migración, el trabajo asalariado en las empresas de flores y el desarrollo mercantil de las manufacturas), la presencia de sólidas redes familiares en las comunidades, permite un mínimo de seguridad e identidad cultural para enfrentar al capitalismo. La autora se pregunta si a través de esta última estrategia, los campesinos no implementan una 'resistencia' a la transformación capitalista total. Un razonamiento similar desarrolla esta autora al analizar el trabajo de los indígenas en las pequeñas empresas de otavaleños, pues allí a pesar de recibir salarios bajos y trabajar largas jornadas, por lo menos tienen un mínimo de seguridad económica y de identidad cultural (op.cit. 1998). Sin embargo, la desaparición progresiva de ciertos rasgos comunales como el trabajo recíproco y los gastos ceremoniales permitió el ascenso de 'nuevas elites económicas'.

La presencia de sectas protestantes entre las comunidades de artesanos en el área de Otavalo, ha colaborado con el crecimiento de estas actividades económicas y la pérdida de importancia de las fiestas ceremoniales. Se asiste entonces a importantes cambios dentro de un

aparentemente inmóvil caparazón comunal: en la división del trabajo, en la orientación mercantil y hasta en las motivaciones religiosas. La etnicidad no es un obstáculo para la introducción de prácticas más relacionadas con la lógica del capital que con las prácticas pre-capitalistas que erróneamente se piensa están ancladas en las comunidades.

Rafael Guerrero estudia al campesinado costeño (Guerrero 1992). El análisis se centra en las posibilidades que tienen los arroceros de competir en el mercado andino utilizando datos de la década del ochenta. Este ensayo muestra la diferenciación social y productiva existente entre los campesinos de dos zonas productoras de la gramínea (Daule y Vinces) y las pocas posibilidades que tendrían para integrarse en un proceso competitivo (en especial el caso de Vinces) donde es central demostrar eficiencia y altos niveles de productividad. Esto depende del grado o nivel de incorporación de tecnología moderna, de la que carecen precisamente los arroceros de la zona de Vinces en la provincia de Los Ríos. El autor demuestra que las políticas proteccionistas del Estado no generaron aumentos de productividad sino ineficiencia, sobre todo entre los medianos y grandes productores quienes habrían sido los principales beneficiarios de los subsidios estatales (a través del crédito del BNF) desde mediados de la década del setenta hasta 1984. Muchas de las políticas supuestamente dirigidas hacia el pequeño campesino, en realidad terminaban beneficiando a medianos y grandes productores ineficientes lo que constituye 'una carga para la sociedad'.

Pobreza Rural

El tema de la pobreza rural, como una de las principales manifestaciones de la poca capacidad de las políticas de ajuste para resolver los principales problemas del sector rural, fue analizado recientemente gracias a la disponibilidad de nueva información estadística. Por un lado, la realización de la Encuesta de Hogares Rurales en 1990 por el INEM, permitió un primer acercamiento real a la situación de las familias campesinas y incluso sobre esta base se logró elaborar una 'tipología de productores' que facilitó ubicar a la población pobre rural (Martínez 1985); por otro, la realización de la Encuesta de Condiciones

de Vida (ECV) por el SECAP (1994) y el INEC (1995), con el apoyo del Banco Mundial, permitió la elaboración del informe de la pobreza sobre datos empíricos a nivel nacional (The World Bank 1996). Por primera vez, entonces, la pobreza rural apareció cuantificada e incluso graficada (Larrea, et alii. 1996). Al mismo tiempo se la analizó en el contexto de los principales factores relacionados con este problema y sobre todo de las políticas de focalización a implementarse para reducir su impacto.

El informe del Banco Mundial y posteriormente el estudio de Lanjouw (1996) tienen el mérito de recuperar la discusión sobre la concentración de la tierra, como uno de los elementos estrechamente ligados a la situación de la pobreza en el medio rural. En efecto, con datos a la mano, muestran que en el país, el grado de concentración de tierra (coeficiente Gini), no se ha modificado mucho desde 1954 y las reformas agrarias no han incidido en la distribución desigual de la tierra. Lanjouw constata que la mayoría de pequeños campesinos son pobres pero, al mismo tiempo, son más eficientes que los grandes propietarios en los rendimientos por unidad de superficie. Así, la solución para la pobreza consistiría en dotar de tierra a los pequeños campesinos, a través del mercado de tierras. Para ello se requiere formalizar este mercado, implementar la titulación, registro y delimitación de la propiedad basándose en la Ley de Desarrollo Agrícola. Nuevamente aquí se encuentra una visión muy esquemática del mercado de tierras que no considera las dimensiones sociales y políticas que existen con relación a la propiedad fundiaria. En efecto, es poco probable que las tierras excedentarias de los empresarios pasen a poder de los campesinos pobres y se inicie una desconcentración de este recurso. La estructura de poder a escala rural, así como el poco peso político del campesinado y de los pobres rurales, no lo permite.

La pobreza rural también fue examinada en otro documento elaborado por Luciano Martínez en el que se identifican a los pobres rurales en situación más precaria: "los indígenas, las mujeres cabezas de familia, los campesinos minifundistas, y los asalariados temporales" (Martínez 1995). Fuera de los campesinos pobres y los indígenas, el autor destaca el surgimiento de dos nuevos actores de la pobreza: las mujeres jefas de hogar y los trabajadores sin tierra y asalariados temporales, poco estudiados en el ámbito de las Ciencias Sociales.

Las características de la pobreza, en el caso de las mujeres, están acompañadas por situaciones extremas de precariedad social (mujeres de avanzada edad, viudas y sin educación) que frecuentemente se encuentran en el medio rural serrano y costeño. En el caso de los trabajadores sin tierra y asalariados temporales, además de conformar una cohorte de población joven, se trata de un proletariado que sufre las peores consecuencias de la 'desregulación' del mercado de trabajo. En este documento, además de plantear los problemas centrales de este grupo, se delinearán algunas acciones a desarrollarse, entre las que destacan: la ampliación de recursos en tierra, creación del empleo en actividades no agrícolas en el medio rural, el apoyo a las iniciativas de los pobres rurales, la ampliación de la educación a las mujeres rurales, la adopción de nuevas tecnologías y un conocimiento más preciso de las posibilidades del mercado, la capacitación en pequeñas actividades empresariales-gerenciales y el apoyo a formas de organización democrática (comunidades) en el medio rural con un rol económico más activo.

Dentro del esfuerzo por redefinir el mismo concepto de pobreza entre los grupos pobres hay que mencionar el trabajo de Galo Ramón sobre la *Pobreza Indígena* (1995) y el de IICA-CEPLAES sobre *Políticas para combatir la pobreza* (1995). Ambos estudios muestran que los conceptos de pobreza pueden variar mucho si se consideran otras variables y la percepción de la misma población, 'a priori' denominada como pobre. De hecho, para el caso del mundo rural la selección de variables homogéneas para todo el país, tal como lo ha hecho el Banco Mundial en sus encuestas de condiciones de vida, podría significar cierto sobredimensionamiento de la pobreza en áreas como las del oriente.

El trabajo de Sánchez Parga sobre la pobreza indígena, es un intento por acercarse a este tema a través del manejo de los datos censales y los criterios de etnicidad basándose en la lengua o idioma hablado (Sánchez Parga 1996). De este modo, llega a cuantificar a la población indígena en cerca del 10% de la población nacional y aunque este dato ha suscitado resquemores entre la dirigencia indígena, tiene el mérito de redimensionar en cifras el problema indígena en un país donde la misma población rural ha empezado a declinar substancialmente. Los indicadores utilizados en este estudio son los tradicionales como salud,

educación, vivienda y servicios básicos y en este sentido, las soluciones también están limitadas a esos aspectos básicos pero son insuficientes para la comprensión de la pobreza rural. Como lo señala este autor, la pobreza no puede reducirse a una construcción teórica de cifras e indicadores sino que tiene otras dimensiones sociales y sobre todo políticas que tienden a ocultarse y a mostrar solo el lado 'indio' de aquella, olvidando que se trata de un producto de la misma sociedad.

Las políticas agrícolas

En el período de análisis no existen muchos estudios sobre las políticas orientadas hacia el sector rural. La implantación de un modelo económico neoliberal, sustentado en el peso de las políticas macro-económicas de ajuste, al parecer bastaba para la transformación y adecuación de todos los sectores de la economía. De esta forma, no se habría necesitado políticas específicas para el sector agropecuario. La única excepción es el análisis del equipo comandado por M. Whitaker que realiza, en primer lugar, un diagnóstico de la agricultura ecuatoriana a principios de los noventa y, posteriormente, evalúa las reformas a las políticas agrícolas, en especial las tendencias derivadas de la aplicación de la LDA (Whitaker 1996).

En el primer trabajo, centrado en la evolución de la agricultura en las dos últimas décadas, realiza una crítica del modelo sectorial en la agricultura, que habría conducido a un deterioro y mal manejo de los recursos naturales (tierra y agua), escaso desarrollo tecnológico, el fracaso de las políticas de subsidios y fijación de precios y la poca capacidad de almacenamiento disponible. La propuesta central dentro de la concepción neoliberal es la apuesta total al mercado, la disminución del rol del Estado y la orientación del sector hacia el exterior.

En el segundo estudio, se plantea que, en general, las reformas políticas han sido exitosas, en especial en la implantación de un sistema de investigación, educación y extensión para la agricultura, en la desregulación de precios a partir de 1994 y en la privatización de empresas públicas. No obstante, desde su perspectiva ortodoxa, recomienda profundizar y completar aún más estas reformas, en los ámbitos del mercado de tierras (en especial en las comunidades indígenas), la

transferencia de los sistemas públicos de riego hacia asociaciones privadas de aguas (AUAS) y el mejoramiento del sistema de información censal.

Las cifras que presenta Whitaker para demostrar el impacto positivo de las políticas de ajuste para 1988-95 y que llega al 2.9% de crecimiento del PIB agrícola son bastante rezagadas con respecto a aquella que experimentó el país durante la década del 80 y que llegó al 4.1%. Una cosa es clara: la implantación de las políticas de ajuste no ha significado un crecimiento importante del sector, pero sí transformaciones en su estructura y orientación productiva (disminución de la injerencia del sector público, crecimiento de las exportaciones, orientación de la producción hacia afuera, etc.). En ese trabajo no se aborda la agudización de la pobreza y su concentración en el medio rural, tema que indudablemente se refiere a los costos sociales del ajuste, sobre el que hay un profundo silencio en los análisis de este tipo.

Frente a esta visión de las políticas agrícolas derivadas de las políticas macro-económicas de ajuste, actualmente se dispone de una excelente crítica realizada desde el punto de vista económico por Louis Lefebvre (1998). Para empezar, este autor menciona con claridad que el trabajo de Whitaker es 'ideológico' y parte de un principio maniqueísta, pues las políticas para apoyar el mercado hacia afuera son intrínsecamente buenas, mientras las políticas para promocionar el mercado interno, son malas. Al comparar con los casos asiáticos, encuentra que por ejemplo, Corea y Taiwan produjeron una importante redistribución del ingreso a través de políticas de gobierno como fue la realización de una profunda e igualitaria reforma agraria⁷. Eso no ocurrió en Tailandia y Filipinas, dos de los países con serios problemas financieros actuales. Lefebvre llama la atención sobre la actual distribución inequitativa de la tierra y las pocas posibilidades de un desarrollo equilibrado si no se realiza una reforma agraria que permita crear empleo y una mejor distribución del ingreso que incremente el poder de compra de los pobres rurales.

7 Para un análisis más detenido de estas reformas, ver el excelente artículo de Lisa North, "¿Qué pasó en Taiwan?, Un relato de la Reforma Agraria y de la Industrialización Rural", en, Luciano Martínez (ed), *El Desarrollo Sostenible en el Medio Rural*, FLACSO, Biblioteca de Ciencias Sociales, N° 2, Quito, 1997.

Si, por el contrario, se deja al mercado que imponga sus reglas de juego, se producirá la destrucción de las formas tradicionales de producción rural y artesanal, incrementando todavía más el desempleo y subempleo con costos sociales verdaderamente explosivos. La agricultura es importante en el Ecuador, pero para su reactivación, se requiere de políticas tanto para la agricultura comercial como para aquella 'marginal'. Aquí el autor realiza una importante reflexión, pues la reactivación de la agricultura comercial de productos de primera necesidad, no depende tanto de los precios políticos y de las interferencias estatales, sino ante todo del poder de compra de los consumidores. La distribución del ingreso se convierte en el punto nodal para explicar el éxito del desarrollo de la agricultura.

Las políticas desde el Estado, por lo mismo, son importantes para el apoyo tecnológico y crediticio de estos productores. Mucho más significativo es el papel de las políticas de Estado para el 'sector marginal'. Aquí, el autor reivindica la necesidad de impulsar la reforma agraria y las formas organizacionales cooperativas asociativas tan injustamente vilipendiadas en el informe Whitaker. El Estado debería apoyar la creación de empleo a través del impulso a los trabajos públicos (irrigación, drenaje, infraestructura) y el uso de tecnologías intensivas en mano de obra. En un país como el Ecuador, con potenciales recursos y una abundante mano de obra, el rol del Estado es central para no permitir que los intereses de los grupos de poder se impongan a través del uso ideológico del mercado.

De otra parte, existen muy pocos trabajos sobre los costos sociales del modelo neoliberal. Tal vez la excepción es el trabajo de Martínez y Urriola (1994) quienes plantean que en el caso ecuatoriano se estarían consolidando las siguientes tendencias: una disminución tanto en volumen como en rendimientos de los productos para el mercado interno, un proceso sostenido de 'expulsión' de los productores campesinos fuera del ámbito rural y el incremento de las actividades no-agrícolas, la consolidación de una fracción pequeña de empresarios orientados a la exportación de nuevos productos. Se destaca también en este trabajo que dentro del contexto de la subregión andina, el proceso de implantación de las medidas de ajuste ha debido enfrentar al descontento de la sociedad civil, en especial el de la población indígena mayoritariamente ubicada en el medio rural.

Desarrollo Rural

El tema del desarrollo rural adoptó un nuevo giro durante la última década acorde con los nuevos lineamientos de la política aperturista del sector. En efecto, las críticas que se venían realizando desde finales de la década anterior, sobre todo frente al 'modelo institucional' adoptado en el país y a la orientación agrarista y proyectista del desarrollo rural, tuvieron eco en la realización de dos tipos de estudios, los primeros orientados a delinear nuevas propuestas institucionales (Jordán y Echenique 1994) y los segundos, fundamentados en los 'estudios de base', sentar las premisas para la realización de evaluaciones sistemáticas (Martínez y Barril 1995 y DHV, 1995).

Dentro del primer estudio, se encuentran elementos importantes de lo que constituiría la nueva estrategia de desarrollo rural: focalización en los campesinos 'con potencial productivo agropecuario', descentralización del sistema, implantación de proyectos de largo plazo. En cuanto a los componentes prioritarios, no se plantea nada nuevo: generación y transferencia de tecnología, crédito, comercialización, inversiones prediales y capacitación. El aporte más interesante es la reflexión sobre la necesidad de una nueva institucionalidad, con una dirección centralizada normativa y una ejecución descentralizada y muy flexible. La concertación entre los diversos actores sociales del campo solo actúa en la fase de elaboración de propuestas y no en la de ejecución. Este tipo de propuestas no incorpora, como parte del desarrollo rural, a la pobreza y en general elude el agudo problema de la heterogeneidad productiva y social de los productores rurales, amén que se parte, otra vez, de una propuesta excesivamente agrarista.

Los estudios de base son el resultado de investigaciones (con aplicación de encuestas) sobre los componentes prioritarios de los proyectos PRONADER, actualmente en curso. Se trata de investigaciones que abarcan desde variables sociodemográficas hasta variables productivas y socio-organizativas y apuntan a disponer de una base de datos que permita realizar evaluaciones periódicas y a reflexionar sobre las tendencias que se desarrollan en los actuales proyectos para realizar ajustes o reflexiones renovadoras desde el punto de vista conceptual y práctico. El estudio realizado por Luciano Martínez y Alex Barril sobre las doce áreas DRI, con el apoyo del IICA, muestra la alta he-

terogeneidad del campesinado 'beneficiario' de los proyectos; la falta de adecuación entre los componentes implementados de acuerdo a un patrón general y la especificidad de los aspectos productivos, sociales y organizativos a nivel regional y local (Martínez y Barril 1995).

Los autores logran detectar altas potencialidades productivas en los proyectos ubicados en la costa húmeda (Daule, Tres Postes y Playas de Higuerón), medianas posibilidades en los proyectos de estribaciones (Pangua, Facundo Vela y Sta. Isabel) y bajas posibilidades en los proyectos que corresponden a áreas serranas mayoritariamente indígenas (Norte de Pichincha, TTP y Guano); en la sierra solo escapa a esta tendencia el proyecto Espejo-Mira con mejores posibilidades de tipo económico.

La tipología desarrollada al final del estudio presenta una propuesta diferenciada de componentes a implementarse de acuerdo a las características productivas y socioeconómicas predominantes en cada una de las áreas. El desarrollo rural debería conservar un compromiso moral con los pobres y no excluirlos de las propuestas productivas, es decir no ampliar aún más la actual diferenciación social existente en el medio rural. Pero, para ser una propuesta sostenible es importante que los beneficiarios sean algo más que espectadores y puedan ser capaces de 'apropiarse' de los proyectos, lo que va a depender mucho de su actual nivel de organización y capacitación para cumplir nuevas funciones vinculadas con el mercado y con las novedosas demandas de las mismas bases campesinas.

Más recientemente, se ha empezado a sistematizar las experiencias de desarrollo rural impulsadas por ONG que buscan recuperar los éxitos o fracasos de su ya largo trabajo entre los campesinos sobre todo de la sierra. Un importante estudio en esta línea es el de Liisa North (1999) sobre el ya conocido caso de Salinas en la provincia de Bolívar. Esta investigadora analiza los impactos sociales de esta experiencia. Encuentra que los beneficios más importantes radican en la creación de empleo, la disminución de la migración, la diversificación económica y la redistribución de recursos (tierra). Sin embargo, el impacto parece estar concentrado en la cabecera parroquial y en cierto grupo de beneficiarios. ¿Se repetiría también aquí, aunque en una micro-escala, el modelo centro-periferia característico del subdesarrollo andino? La hipótesis que finalmente defiende North es que se trata de

procesos que requieren un largo tiempo de maduración para que puedan caminar por sí solos, pero que gracias a los esfuerzos del FEPP se están creando las bases para ello.

La sostenibilidad, tecnología y sistemas productivos en el medio rural

La investigación sobre el tema del desarrollo sostenible en el medio rural es todavía incipiente en el país. Es probable que se esté investigando el tema de la sostenibilidad con relación al manejo de recursos naturales, pero en ningún caso desde una perspectiva más integral, esto es, que abarque las dimensiones económicas, ecológicas y sociales⁸. No quiere decir que el tema carezca de importancia tanto en el ámbito público como en el privado, sino que se lo aborda únicamente desde la perspectiva ambiental, para desembocar en lineamientos de política que apenas alcanzan a ser declaraciones de buenas intenciones con pocas posibilidades de implementarse en la práctica (CAAM 1995).

Una excepción es el interesante trabajo de Bebbington sobre Chimborazo, donde se estudia la dinámica de las comunidades pobres y de las federaciones indígenas desde la perspectiva sustentable, señalando los límites y posibilidades reales de desarrollo regional (Bebbington 1993). El autor desarrolla la idea de que lo tecnológico no es siempre la panacea para las comunidades indígenas pobres, si además no se consideran otras variables, entre las cuales sobresale la 'organizativa'. Además plantea interesantes hipótesis, tanto sobre los límites de la 'agroecología' como sobre las respuestas de la organización campesina. En esta última perspectiva son interesantes sus anotaciones sobre la falta de respuesta tecnológica frente al paquete de la revolución verde, así como la incapacidad de intervenir en la economía regional.

El seminario sobre *Desarrollo sostenible en el medio rural*, realizado en la FLACSO en noviembre de 1997, muestra algunos estudios

8 En muchas instituciones como la FLACSO, Fundación Natura, Acción Ecológica, Eco-ciencia, por solo señalar algunas, existen varios proyectos de investigación, lamentablemente muy pocos se han publicado.

donde se aborda el tema desde varias perspectivas. Luciano Martínez, propone la necesidad de un enfoque integrado (económico, ecológico y social) para el estudio de la sostenibilidad en el medio rural, de esta manera se podría avanzar desde la perspectiva micro hasta una dimensión regional que explique las imbricadas conexiones de lo rural con lo urbano (Martínez 1997). Analiza el caso de las comunidades de la cordillera occidental de Tungurahua, donde la conservación del páramo ha dependido en gran medida de la presencia de otras alternativas productivas diferentes de la agricultura, por lo cual la presión interna de las comunidades no se orientó en dirección hacia ese frágil recurso ecológico.

Guadalupe Tobar (1997) reflexiona sobre la práctica institucional de CESA, para mostrar la importancia de abordar el tema de la sostenibilidad a través del trabajo con los campesinos y comunidades, enfrentados a resolver bajo métodos participativos sus principales problemas. Amparo Eguiguren (1997), a partir de un estudio sobre la zona de Nanegal (noroccidente de Pichincha), analiza la poca viabilidad de la extracción maderera tal como se la practica actualmente, y la necesidad de modificar las 'representaciones' de los colonos en el sentido de internalizar la dimensión 'sostenible' en el manejo de los recursos, lo que incluye aspectos que van desde la participación de la comunidad hasta la toma de conciencia de un problema que no se agota en el ámbito local.

Leonard Field estudia el impacto del manejo inadecuado de los recursos naturales en las áreas de páramo de la cordillera occidental en Cotopaxi y Tungurahua: expansión de la frontera agrícola, deforestación, erosión y contaminación de aguas (Field 1996). Los factores que determinan los impactos (expansión de los mercados, inversión en carreteras, acumulaciones primarias de capital, crecimiento demográfico) actúan en una forma combinada y dependen mucho de los sistemas de producción y de las especificidades locales. En la actual conceptualización sobre la sostenibilidad también es importante considerar aquellos elementos intrínsecos provenientes de las comunidades para quienes es vital su sobrevivencia por sobre las variables ecologistas provenientes de la conceptualización externa a su medio, se necesita por lo tanto llegar a consensos sobre el contenido del desarrollo sostenible (Field 1997).

La 'sostenibilidad' se va convirtiendo en el paradigma de análisis y de reflexión aún dentro del estricto campo de la investigación sobre tecnología y sistemas de producción. Sin entrar a describir toda la investigación desarrollada en los institutos de investigación nacionales (tema que queda fuera del alcance de este trabajo), me limitaré a mencionar dos vertientes que empiezan a aportar nuevos elementos de reflexión: la agroecológica y aquella vinculada a la revolución verde pero que incluye elementos críticos provenientes del desarrollo sostenible. Sobre la primera, son interesantes los estudios de caso de CEA (1997), donde se parte de una crítica radical al modelo de la revolución verde, pero más allá de los estudios ubicados en contextos específicos no se vislumbra la viabilidad de un modelo alternativo que supere la condición de 'inviabilidad' de la mayoría de los productores pobres. Así por ejemplo, por solo mencionar un caso, el estudio realizado en Otón, en la provincia de Pichincha (Peralvo, et alii 1997), nunca menciona si la estrategia agroecológica logró parar la corriente migratoria en la cual se inserta la principal mano de obra de esta comunidad y que constituye la principal fuente de los ingresos de estas familias. La experiencia puede haber sido exitosa para diversificar la dieta alimenticia pero no para cambiar el patrón ocupacional de la comunidad.

Los otros estudios, más centrados en la investigación agronómica propiamente dicha, ponen el acento en los parámetros productivistas, las limitaciones tecnológicas de los productores y las necesidades imperativas del cambio tecnológico para entrar a competir en el mercado mundial. No obstante, el estudio de Crissman, muestra las importantes relaciones entre el cambio tecnológico y la salud ocupacional. Al analizar la producción papera del Carchi, debido al mal manejo de insumos químicos, se encontraron impactos más negativos en la salud de los trabajadores que en el medio ambiente (Crissman y Espinoza 1997).

La mayor parte de los trabajos realizados en el INIAP, continúan privilegiando el enfoque de sistemas como herramienta metodológica para derivar en los 'modelos de simulación', más útiles para la explicación científica que para la solución de los problemas de los campesinos (Rodríguez, et alii, 1993; Arce et alii, 1993). Estos estudios se centran en productos mercantiles tanto de exportación (café), como de consumo interno (ganadería de leche). En cambio, otros estudios realizados en el marco de ONG, han sido más permeables a la incorporación de la va-

riable ambiental. Así por ejemplo, el estudio de FUNDAGRO sobre las ventajas del uso de la tecnología agroforestal en los cultivos de café en la Amazonia del nororiente, muestra que la producción de madera puede ayudar a contrarrestar los efectos cíclicos en los precios del café. (Uquillas, Ramírez, Seré, 1993).

Una notable excepción es el estudio de Leonard Field realizado en tres áreas de la sierra norte, en donde se utiliza el concepto más amplio y complejo de sistema de producción, que involucra varios sistemas de cultivo, la familia como unidad de análisis e incorpora tanto actividades agropecuarias como no agrícolas (Field 1991). Este trabajo puntualiza que existen diversas estrategias de los productores (con su propia identidad cultural) tendientes a aprovechar de mejor manera el recurso al que tienen acceso. Igualmente, que los sistemas de producción agrícolas solo utilizan una mínima porción de la mano de obra disponible y que las actividades de la parcela tienen poca posibilidad de absorberla. Con respecto al incremento de la productividad de los cultivos, esto solo sería factible con un mejoramiento en la estructura del suelo, es decir con la incorporación de materia orgánica.

El trabajo de Manuel Suquilanda (1996), sobre las potencialidades de la agricultura orgánica en el Ecuador, sobre todo por la síntesis de las iniciativas en la generación de tecnologías alternativas que se vienen desarrollando en el país a partir de la década del 90, especialmente en ONG que trabajan con sectores campesinos, es interesante.

A pesar del importante esfuerzo realizado hasta ahora, no se ve con claridad que esta sea la opción para los pequeños agricultores pobres, sino para un estrato que puede beneficiarse sobre todo para la producción 'orgánica' con miras a la exportación; en este sentido, el desarrollo de la agricultura orgánica en el país solo estaría apuntando hacia la búsqueda de la producción de alta calidad que beneficia a una elite de productores rurales y consumidores urbanos dispuestos a pagar altos precios y no a reducir las desigualdades sociales en el campo.

Mercado y capital financiero

Estos dos temas constituyen actualmente el meollo de la posible integración de los campesinos en el modelo aperturista; por ello, la discu-

sión sobre el futuro del campesinado tiende a 'reducirse' a estas dimensiones, tanto en el ámbito público como en el privado.

En realidad no se trata de temas nuevos. El mercado fue analizado entre los agraristas en los años setenta desde la perspectiva de la 'comercialización', el permanente 'talón de Aquiles' de la economía campesina y para ello casi siempre se proponía eliminar a los intermediarios, convertidos en los 'explotadores' del campesino, sin lograr comprender el rol importante que en el contexto de la economía campesina jugaban estos sectores (agilidad y oportunidad en los préstamos, disminución de los costos de transacción del dinero). Si bien la monetización de la economía campesina se realizaba desde los años setenta con visos de altas exacciones económicas, sin embargo, mostraba a los incrédulos agentes del capital financiero formal que los campesinos también pueden endeudarse pero bajo ciertas reglas acordes con su idiosincrasia y las limitaciones del ciclo de los cultivos. Este fue siempre el éxito de los 'chulqueros, comerciantes, intermediarios y fomentadores' que pululan en el campo, en especial entre los pequeños campesinos mercantiles.

En la década del 90, la reflexión sobre el capital financiero proviene de las preocupaciones de nuevos agentes financieros que pretenden irrumpir entre los campesinos mercantiles, sobre todo de la costa. En este sentido, el aporte de FINAGRO es importante en la nueva reflexión sobre este tema, aunque es justo señalarlo, también fue una de las preocupaciones centrales de ONG que buscaban nuevos derroteros para su accionar en el medio rural, luego de la desilusión del fracaso desarrollista. Y lo más sorprendente de todo, los mismos indígenas empiezan a preocuparse por este tema, al comprobar que el proceso de desregulación agrario eliminaba al Banco Nacional de Fomento (BNF) como un banco orientado hacia los campesinos y pasaba a ser un simple banco comercial con pocas posibilidades de orientar sus créditos hacia los pequeños productores rurales⁹.

A continuación se examinan las tendencias de discusión más importantes sobre el tema del capital financiero.

9 Esta es la preocupación central para la formación de la CORFINCA, Corporación Financiera del Campo, auspiciada por la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso Nacional. Cf: Varios Autores, *Crédito para la Vida*, Abya Yala, Quito, 1999.

El análisis realizado sobre el BNF muestra que en realidad el crédito no fluía en su mayoría hacia los campesinos pequeños sino hacia medianos y grandes (Santos 1993, Younger 1996). De esta forma, los campesinos mercantiles de la costa casi siempre acudían a los intermediarios 'crediticios' informales, ubicados en la esfera de la comercialización, que a pesar de cobrar tasas de interés del 150% anual, permitían que la producción tanto de arroz como de soya, se realice. Este agresivo endeudamiento significó la pérdida de la propiedad en importantes sectores de campesinos beneficiarios de la reforma agraria, lo que significaba que la producción arrocerá para el mercado interno se lo hacía a un alto costo social. La ineficiencia del BNF, sus altos costos operativos, su descapitalización y corrupción implicaron que desapareciera una opción que desde el Estado no pudo cumplir sus objetivos centrales.

Frente a esta 'debacle' financiera estatal, surgieron otras opciones ubicadas en el ámbito del crédito formal, como es la de FINAGRO. Hacia 1993, trabajaba en la provincia de Los Ríos con productores pequeños, pero bajo la lógica del mercado: tasas reales, asistencia técnica, cadenas de comercialización en búsqueda de mejores precios, etc. (Santos 1993). Posteriormente, actuando ya como banco privado realizó una encuesta en la misma provincia, y logró detectar una serie de importantes problemas que afectan a los productores con relación al crédito (FINAGRO 1996).

En primer lugar, una alta proporción de los campesinos de esta área no recibe crédito y cuando lo hace, es a través del crédito informal. En segundo lugar, el crédito informal tiene una serie de ventajas sobre el formal, los agricultores buscaban en esta fuente el financiamiento de sus actividades: oportunidad en la entrega del préstamo, trámites sencillos, tasas de interés nulas o bajas, buena atención, cercanía a sus lugares de trabajo, sin garantías y sin mayores gastos adicionales. La recuperación de este tipo de crédito era también alta y el porcentaje de deudores muy bajo. Frente a esto, el crédito formal a pesar de que en su mayor proporción fluía a través del BNF y en menor medida de la banca privada, adolecía de varios problemas: altas tasas de interés, plazos muy cortos, necesidad de garantías, gastos adicionales y solo cubría a una pequeña parte de las familias.

El esquema, comprobado en otras partes del Tercer Mundo, se repite, en donde el crédito formal si no se adapta a las condiciones de

la economía campesina no tiene ningún futuro en este medio¹⁰. Llama la atención la no presencia de fomentadores y/o chulqueros como oferentes de crédito. La mayor parte del crédito informal es ofrecido por los 'familiares y amigos' y, en segundo lugar, por los 'mayoristas'. Por ello, el préstamo se realiza 'sin intereses' en la mayoría de los casos, aunque con ciertas obligaciones como la 'entrega de la producción en cosecha'. Considerando que se trata de campesinos pobres que constituyen la demanda de este tipo de crédito, es lógico suponer que lo hacen a parientes y amigos más acomodados, lo que permite afirmar la gran heterogeneidad social del campesino arrocero de la costa. Si bien FINAGRO era optimista en el papel que podría jugar la banca privada con estos productores, sobre todo por su 'solvencia' en el pago de la deuda, es probable que si no se modifican las rígidas condiciones de acceso al crédito, los productores pobres quedarán marginados y seguirán dentro del marco de la informalidad financiera.

La importancia del crédito rural fue retomada por las ONG (COASER 1994). El FEPP fue una de las primeras instituciones en desarrollar líneas de crédito para la compra de tierra en varias provincias de la sierra a través del mecanismo de conversión de deuda externa (Tonello y Verdesoto 1994). Pero, además de esta experiencia, la discusión más interesante se centró en el tema de los 'mercados financieros rurales'. Se constató la complejidad de la nueva sociedad rural, el surgimiento de nuevas iniciativas y las pocas posibilidades que tendrían los campesinos pobres de ser sujetos de crédito formal. Se rescataron algunos ejemplos embrionarios en el país como el del FEPP en Salinas, provincia de Bolívar y experiencias vinculadas al crédito formal a través del sistema de garantías crediticias en Tungurahua. Al final, faltó una reflexión sobre otras alternativas más avanzadas en Latinoamérica y sobre aquellas mucho más ambiciosas de crédito rural que funcionan exitosamente en el sudeste asiático y en Bangladesh (González y Chávez 1995; Jain 1997).

10 A esta conclusión llegaron otros estudios realizados sobre la década del 80, en los cuales se constataron los bajos costos de transacción en los pequeños créditos informales establecidos sobre lazos de confianza entre el prestamista y el prestatario. Cf. Ramos. 1989.

Las investigaciones sobre el tema del 'mercado' son aún más escasas y se orientan al tema del 'aperturismo' y de la integración en la OMC (Hernández y Urriola 1993; Martínez Jaime 1996). Pocas reflexiones, en cambio, se han hecho con respecto a las características del funcionamiento de los 'mercados reales', en el sentido utilizado por Cynthia Hewitt de Alcántara: "instituciones cultural y políticamente específicas que cuestionan las supuestas ventajas del mercado conceptualizado, de manera simplista, como el mejor asignador de los recursos a través de las reglas impersonales de la oferta y la demanda" (1993:2-3).

En esta línea, el reciente artículo de Emilia Ferraro (1996), muestra la riqueza de análisis sobre el tema de los mercados aplicado a las economías campesinas. A partir de la hipótesis que los mercados no responden solo a criterios económicos sino también a criterios socio-culturales demuestra, en el caso de comunidades indígenas de Cayambe, en la provincia de Pichincha, que en las relaciones de mercado no rige únicamente el precio, sino que existen toda una variedad de criterios que van desde el crédito que otorga el intermediario 'lechero' hasta la confianza depositada y el grado de solidaridad con la comunidad. Los 'lecheros intermediarios' para poder captar su clientela entre los indígenas debieron adaptarse a ciertos rasgos subsistentes del sistema de hacienda como los 'suplidos y socorros'. El mercado real funciona con parámetros pre-capitalistas para ser eficiente, en un medio donde la ganadería empieza a tomar auge frente a la agricultura. La autora destaca además el tema del 'poder', lo que determina el acceso al mercado, la permanencia y las reglas de juego con los productores. En definitiva, el mercado en este caso no funciona sobre las bases teóricas neo-liberales impersonales, basadas en intereses individuales y donde la cultura y las relaciones sociales no juegan ningún papel. Al contrario, el mercado debe necesariamente estructurarse con relación a estos elementos si quiere ser eficiente.

Existen también algunos trabajos que desde la perspectiva económica abordan los problemas de comercialización, sobre todo de los productos de la costa. Estos, desarrollados en el PRSA del Ministerio de Agricultura y Ganadería, plantean los principales problemas que afectan a cultivos como soya, arroz y maíz duro (Vallejo Páez 1996). Los estudios evalúan los efectos de las políticas macro-económicas sobre la rentabilidad de estos cultivos y en casi todos ellos, los problemas

de comercialización saltan a la vista: falta de sistemas de almacenamiento en el caso de la soya, transferencia de recursos desde el productor a las piladoras obsoletas en el caso del arroz y la presencia de un mercado monopólico en el caso del maíz duro.¹¹

Desde la perspectiva de los nuevos productos de exportación y su vinculación con el mercado mundial, destacan los trabajos de William Waters sobre el crecimiento de las exportaciones de flores y cultivos no tradicionales en el conjunto de las exportaciones del país hasta inicios de la década del 90 (Waters 1991, 1993). Se examinan las consecuencias de la inserción en el mercado mundial en el contexto de las transformaciones 'fordistas'. Únicamente productores grandes o medianos como máximo pueden beneficiarse de este proceso debido a los altos niveles de inversión requeridos, a las condiciones de calidad y a las restricciones sanitarias impuestas por los países centrales importadores de frutas, hortalizas y flores.

La flexibilidad de los sistemas productivos permite que la producción obtenida en determinadas condiciones agroecológicas, pueda responder a una demanda concentrada en ciertas épocas del año. Existen también diversas formas de articulación entre productores y el mercado mundial: desde empresas que controlan todo el proceso hasta empresas que trabajan a través de contratos con productores medianos y pequeños. Sin embargo, no se analiza a fondo los efectos sobre la diferenciación entre productores, ni la generación de empleo para las comunidades minifundistas cercanas a las plantaciones. Tampoco se estudia los efectos negativos en la salud de los trabajadores y sus consecuencias a largo plazo sobre la viabilidad de las comunidades, aspecto que no ha sido sustentado en investigaciones empíricas (Harari 1989).

Organización rural y capital social

Primero la crisis de los años setenta y luego las políticas de ajuste erosionaron las economías campesinas, cuyo impacto se manifestó en la

11 La presencia mayoritaria de las piladoras obsoletas, que procesaban el 40 % del arroz producido entre 1982-87, ya fue observada en el mencionado estudio de Hugo H. Ramos (1989).

organización rural. Cristóbal Kay (1995), señala, para el contexto de América Latina, que la década perdida también tuvo su corolario en el debilitamiento de las organizaciones campesinas tradicionales. Para el caso ecuatoriano, la década del ochenta fue al contrario calificada por algunos investigadores como la 'década ganada', al constatar el crecimiento 'numérico' de las organizaciones de segundo grado, sobre todo en el medio indígena. Esta es la tesis principal de Bebbington y sus colaboradores (Bebbington, A. et alii 1992): demostrar que pese a los problemas económicos que acosaron al campesinado y comunidades indígenas, la respuesta vino por el lado de la organización que contempla ya no solo demandas de corte productivo sino también demandas organizativas, culturales y étnicas.

Este mismo autor avanzó esta idea en un trabajo anterior basado en Chimborazo, en el cual mostraba la presencia de una "estrategia agraria indígena que implicaba la administración de sus recursos y el proceso de desarrollo en el espacio rural por parte de las organizaciones locales" (Bebbington 1992:161). Si bien es cierto que las organizaciones crecieron en esa década, tampoco es menos cierto que este dato cuantitativo no es suficiente para arribar a conclusiones tan optimistas. En efecto, las organizaciones de segundo grado crecieron paralelamente a la oferta de proyectos de desarrollo. Una vez que estos ya no fueron tan copiosos en la década del noventa, muchas de estas organizaciones entraron en crisis y algunas desaparecieron o figuran solo en el membrete institucional. Las más recientes aproximaciones a este tema muestran que muy pocas organizaciones de segundo grado tienen capacidad para generar propuestas y menos aún para ejecutarlas (Martínez 1997).

El perfil organizacional de los años noventa pasa por otras variables más cercanas a aquellas de la micro-empresa y de la gestión gerencial que aquellas de corte socio-organizativo y étnico-político. La pregunta sobre la 'calidad' de este capital social se torna pertinente si, como sucede actualmente, muchas propuestas sobre el futuro del desarrollo rural o la viabilidad de los proyectos, se basa en las potencialidades de la organización campesina.

Un estudio que demostraba las debilidades y potencialidades de las organizaciones de segundo grado es el realizado por Paola Sylva en tres áreas del oriente, sierra y costa a principios de los años noventa

(Silva 1991). En efecto, las OSG no actuaban como entidades productivas sino más bien como 'grupos de presión'; es decir, se trataba de organizaciones que privilegiaban el ámbito socio-organizativo y político y no tanto el económico-productivo. Las OSG estudiadas no fueron rentables, ni generaron utilidades, es decir, no consiguieron capitalizarse. Tenían varios problemas en su funcionamiento interno, como la falta de participación de las bases, la utilización de los puestos directivos como mecanismo de ascenso individual y económico. Frente a esto, la reivindicación de las organizaciones de base como instancias más representativas de los intereses de campesinos e indígenas y la necesidad de que las OSG definan las relaciones de cooperación con ellas fue natural.

Paola Silva somete a las OSG al análisis sobre el paradigma 'autogestionario', cuando en realidad, estas organizaciones más bien fueron impulsadas desde fuera para viabilizar las acciones de desarrollo rural. Era bastante improbable que hubieran surgido como el resultado de una acumulación de éxitos organizativos o económicos en pequeña escala. Las debilidades de las OSG hacia adentro y hacia fuera, a finales de la década de los 80, constatadas en ese estudio vienen a cuestionar la visión un poco 'naif' de la década ganada.

Las mismas organizaciones de segundo grado han realizado esfuerzos por reflexionar sobre su situación (CPOCA 1992). Así por ejemplo, en el caso del Azuay, se acepta la relación entre organización campesina y proyectos, en el sentido que muchas organizaciones son el resultado de las exigencias externas para canalizar proyectos antes que de un proceso interno de consolidación de sus propias organizaciones tradicionales. Esta fue la situación de la mayoría de organizaciones hasta la mitad de la década de los 80, articuladas en torno a los proyectos. Cuando disminuyeron los proyectos, empezó una etapa de 'desestructuración' de las organizaciones. Los proyectos de mayor permanencia fueron los de comercialización, mientras que los más difíciles de concretarse fueron los agrícolas. Surgieron proyectos nuevos como los de artesanía, mientras continuaban los 'recurrentes', como los de obras de infraestructura. El 'proyectismo' dentro de la organización campesina, causó en general más problemas que beneficios: desvinculación de las necesidades de los campesinos, presencia de paternalismo, fracasos y manejo inescrupuloso de fondos, división en las comunidades, falta de compromiso con las bases, manejo no autónomo de los proyectos. po-

ca replicabilidad de micro-proyectos, etc. En general, para los campesinos del Azuay, la experiencia acumulada hasta principios de los años noventa no era positiva y requería de una reconceptualización del rol de la organización.

El nivel de organización, al menos en las doce áreas PRONADER, fue analizado por Carlos Arrobo y Mercedes Prieto (1995). Se trata de una muestra bastante representativa del campesinado ecuatoriano y, por lo mismo, las tendencias que se expresan demuestran las debilidades y fortalezas de la organización en el medio rural. La visión de los autores es que en el sistema PRONADER, los niveles de participación de la población beneficiaria son deficitarios, poniendo en duda la sostenibilidad futura de los proyectos.

Los problemas derivados del término 'participación', su utilización instrumental por parte de los técnicos de campo, a través de los 'comités de campo y comités locales de producción', ha impedido potenciar la organización como base de la sostenibilidad de las acciones entre los campesinos. Estos comités, por ejemplo, al encontrarse 'subordinados' al proyecto tienen poca capacidad de autogestionarse. En el funcionamiento de algunas organizaciones se pueden ver las trazas de paternalismo y clientelismo en la relación Estado - organizaciones campesinas. Igualmente, han proliferado cierto tipo de organizaciones 'ad hoc', más relacionadas con la necesidad de ejecutar acciones que con el apoyo a formas más tradicionales del campesinado. Pero también los actores campesinos demuestran ciertas debilidades y situaciones conflictivas y de desconfianza. Los autores encuentran las mismas debilidades constatadas por estudios anteriores: apatía y desconfianza, alejamiento entre bases y dirigentes, paternalismo y abuso de poder de la cúpula de dirigentes.

El estudio sobre el rol de las organizaciones no gubernamentales (ONG), la mayoría de las cuales efectivamente ha desplegado su acción en el medio rural, abre una veta de investigación novedosa (Arcos y Palomeque 1997). Las reflexiones sobre estas instituciones se centran en el análisis de sus experiencias exitosas y, en menor medida, en sus problemas o debilidades. Frente a la vigencia del modelo neoliberal y a la necesidad urgente de responder a las pocas fuentes financieras disponibles, se pone el énfasis en la necesidad de un vuelco total en su orientación. Como dicen los autores, es necesario pasar de ser institu-

ciones sin finalidades de lucro a ser instituciones de 'venta de servicios'. Para ello es necesario consolidar una capacidad técnica-gerencial que permita aumentar el nivel de eficiencia y oportunidad de las ONG en las relaciones definidas por el mercado y las nuevas orientaciones de las agencias de financiamiento. Se enfatiza en la necesidad del autofinanciamiento a través del cobro de servicios y el trabajo en espacios más amplios, a través de redes y de una coordinación efectiva. No se abandona completamente el espíritu solidario de colaboración con los pobres, pero se da a entender que las reglas del juego ya no serán las mismas, ni desde el punto de vista institucional ni del entorno social en donde se buscarían socios estratégicos inclusive en el sector privado, puesto que la pobreza no es solo asunto del Estado y las ONG. Esta nueva posición no parte de una crítica al actual modelo económico y la búsqueda de alternativas. Las ONG pretenden transformarse en 'empresas' especializadas del sector social y de algunos sectores productivos en los cuales la actual empresa privada no estaría interesada en arriesgar capital. El nuevo rol de estas instituciones no contempla las deficiencias institucionales del modelo neoliberal, mientras es más claro el de 'intermediación' funcional a los intereses del capital, antes que de los sectores sociales a los cuáles se desea beneficiar.

Algunas tendencias para la investigación

De la revisión de los principales estudios realizados durante la última década sobre el sector rural, entendido en su visión más amplia y no solamente agraria, se puede concretar algunas tendencias que ante todo pueden ilustrar el camino seguido y las pistas para profundizar o completar los vacíos en las investigaciones futuras.

1. Los problemas del sector rural no han perdido su vigencia en esta década, a pesar de los obstáculos económicos y la relativa disminución de la investigación en Ciencias Sociales y afines. Una primera sorpresa es constatar que existe un número importante de estudios sobre campos mucho más variados que hace unos 15 años. No obstante, también es cierto que este abanico de temas no generó debates en torno a los problemas centrales del sector rural, ni tampoco estudios globales que recojan y procesen toda la riqueza analítica

de estos diez últimos años. Sin embargo, la diversidad muestra también la actual heterogeneidad social y productiva del sector rural que no puede en adelante ser enfocado únicamente a través de estudios 'agraristas'.

2. La desigualdad en los trabajos sobre el sector rural puede evidenciarse en la calidad de los mismos. Algunos son el producto de investigaciones serias de al menos 2 ó 3 años de duración, otros en cambio, son aproximaciones o hipótesis de trabajo condensadas en artículos de revistas y finalmente, lo que más abunda son informes y folletería vinculados al trabajo de instituciones de desarrollo y ONG, que responden a las necesidades prácticas del trabajo con diversos sujetos sociales.
3. La diversidad de temas analizados, desde los tradicionales (tenencia de la tierra), hasta los nuevos (mercado, capital social), indica también que hay cierta renovación en el 'portafolio' de la investigación rural. Por un lado, una aproximación a trabajos interdisciplinarios en temas como la sostenibilidad y la tecnología, por otro, innovación de marcos teóricos en temas nuevos como el capital social y el problema organizacional. No hay producción sobre un tema tan crucial como el de la 'política económica' que ha quedado en manos de expertos extranjeros encargados de sentar líneas sobre lo 'que hay que hacer' en el medio rural. Esto a su vez es una muestra de la dispersión académica y la falta de espacios de discusión y debate que permitan crear las bases de una producción más sistemática en torno a los problemas estructurales de la sociedad rural.
4. Los temas de la agenda actual son promovidos, la mayoría de las veces, por instituciones de financiamiento e investigación internacionales: políticas diferenciadas, relación campo-ciudad, multiocupación rural, género, descentralización, etc., temas, de alguna manera, objeto de atención en nuestro medio, aunque no a partir de una política de investigación definida, sino más bien por iniciativas de investigadores o de instituciones de desarrollo. La etnicidad es, probablemente, el 'tema de moda' en el medio rural y en el caso ecuatoriano ha tenido una prolífica respuesta institucional y privada. En este estudio por razones de división del trabajo no se lo analiza, pero seguirá manifestándose con fuerza en el futuro.

Otros temas, hasta ahora considerados ‘superados’, como por ejemplo, el acceso y tenencia de la tierra, el agua, la reforma agraria, el mercado de tierra, el empleo rural, etc., pueden adquirir importancia por su relevancia en las políticas para el sector rural y por los cambios que se implementan en las actuales políticas macro-económicas.

5. Las posibilidades de la investigación rural futura van a depender mucho de la articulación de los intereses de la sociedad civil, en especial de las redes que existan o que puedan formarse alrededor de una agenda de investigación viable y sostenible. Por el momento, los espacios académicos de la investigación no tienen posibilidades de tomar iniciativas de tal naturaleza, así que queda la esperanza de que los mismos investigadores (de diversos ámbitos, públicos y privados) apoyados por instituciones estatales y privadas, puedan concretar ideas parecidas hacia el futuro. La actual desarticulación de la investigación y su dependencia financiera cortoplacista de modas o agendas no compatibles con las prioridades del mundo rural, puede resultar nada eficiente desde el punto de vista del impacto que se espera de estos trabajos. Es importante avanzar en la conformación de espacios de investigación en todos los niveles posibles: desde el estatal, pasando por las universidades y ONG hasta el de las mismas organizaciones campesinas; única manera de acumular un conocimiento que hoy más que nunca es necesario para orientar los derroteros de la sociedad rural del próximo siglo. Frente al proceso de la ‘globalización’ sería muy importante fortalecer las relaciones con investigadores afines de fuera del país, de manera que se pueda aprovechar los estudios que se realizan en las universidades y centros de investigación y por otro lado, impulsar la realización de proyectos conjuntos para estudiar procesos del mundo rural que empiezan en nuestro país pero que terminan en los mercados de los países centrales.
6. La progresiva recuperación del análisis y de la investigación, desde una perspectiva social en el diseño de proyectos que se ha producido en agencias multilaterales de financiamiento, cuando se dirigen hacia los pobres rurales, muestra una importante revaloración del rol de los analistas sociales. Temas como el capital social, la agricultura ampliada, la sostenibilidad, la pobreza, etc., indican-

el fracaso de numerosos proyectos de desarrollo rural cuando no se considera las iniciativas, potencialidades y alternativas de los mismos beneficiarios, es decir 'de la gente'. Actualmente, es una necesidad contar con estudios, análisis y aportes desde las Ciencias Sociales (Cernea 1995). Esta es una veta que debe ser aprovechada eficientemente para institucionalizar la investigación multidisciplinaria en un medio que hasta ahora ha sido poco proclive a esta iniciativa.

Siglas utilizadas

CIDA	Centro Internacional de Desarrollo Agrícola
CLACSO	Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
FLACSO	Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
CEPLAES	Centro de Planificación y Estudios Sociales
IDEA	Instituto de Estrategias Agropecuarias
LDA	Ley de Desarrollo Agropecuario
FAO	Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
ONG	Organización No Gubernamental
IERAC	Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización (desaparecido)
INDA	Instituto de Desarrollo Agropecuario
FEPP	Fundación Ecuatoriana Populorum Progressio
FUNDAGRO	Fundación de Desarrollo Agropecuario
INEM	Instituto Nacional de Empleo (desaparecido)
UPA	Unidad de Producción Agropecuaria
PEA	Población Económicamente Activa
OMC	Organización Mundial del Comercio
CONAIE	Consejo de Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador
OSG	Organización de Segundo Grado
BNF	Banco Nacional de Fomento
SECAP	Servicio de Capacitación Profesional
INEC	Instituto Nacional de Estadística y Censos
IICA	Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola
PIB	Producto Interno Bruto
PRONADER	Programa Nacional de Desarrollo Rural
DRI	Desarrollo Rural Integral
CESA	Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas
CEA	Coordinadora Ecuatoriana de Agroecología
INIAP	Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias
FINAGRO	Financiera del Agro (desaparecida)
PRSA	Programa Sectorial Agropecuario del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)